



Roj: **STSJ MU 1948/2017** - ECLI: **ES:TSJMU:2017:1948**

Id Cendoj: **30030310012017100009**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal**

Sede: **Murcia**

Sección: **1**

Fecha: **22/12/2017**

Nº de Recurso: **5/2017**

Nº de Resolución: **4/2017**

Procedimiento: **PENAL - JURADO**

Ponente: **JULIAN PEREZ-TEMPLADO JORDAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

T.S.J.MURCIA SALA CIV/PE MURCIA

SENTENCIA: 00004/2017

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

RONDA DE GARAY, S/N

Teléfono: 968229383

Equipo/usuario: PBG Modelo: 001100

N.I.G.: 30015 41 2 2015 0020100

Refª.- RAJ RECURSO DE APELACION AL JURADO 0000005 /2017

Sobre: ASESINATO

Denunciante/querellante: Miguel

Procurador/a: D/Dª LEOPOLDO GONZALEZ CAMPILLO

Abogado/a: D/Dª DANIEL FRUTOS CAJA

Contra: MINISTERIO FISCAL, María Virtudes

Procurador/a: D/Dª , MARIA ANGELES MEROÑO SABATER

Abogado/a: D/Dª , PEDRO JULIAN POZO SALAZAR

Excmo. Sr.

D. Miguel Pasqual del Riquelme Herrero

Presidente

Ilmos. Srs.

D. Julián Pérez Templado Jordán

D. Enrique Quiñonero Cervantes

Magistrados

=====

En Murcia a 22 de diciembre de 2017.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal superior de Justicia de Murcia, compuesta por los tres magistrados titulares de la misma reseñados al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 4 /17

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones del orden penal Rollo 5/2017, procedentes de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, Rollo 1/2017, tramitado conforme al procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, presidido por el Ilmo. Sr. Magistrado don José Luis García Fernández, que a su vez dimana del Procedimiento de la L.O.T.J. nº 1/2016 instruido por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Caravaca de la Cruz, por delito de asesinato, contra Miguel, en virtud de recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2017, habiendo comparecido en esta alzada como apelante Miguel, representado por el procurador don Leopoldo González Campillo y defendido por el letrado don Daniel Frutos Caja, y como apelados el Ministerio Fiscal y María Virtudes, actuando en su propio nombre y como representante legal de sus dos hijos menores de edad Casiano y Justa, personada como acusación particular y representada por la procuradora doña María Angeles Meroño Sabater y defendida por el letrado don Pedro Julián Pozo Salazar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El juzgado de instrucción núm. 1 de Caravaca de la Cruz instruyó causa penal de la L.O.T.J. contra Miguel, por delito de asesinato, y una vez concluida la remitió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, la que por medio del correspondiente Tribunal del Jurado, con fecha 28 de junio de 2017, dictó sentencia cuyos hechos probados son los siguientes:

I.- El Jurado ha declarado probados en su veredicto, en todos los casos por unanimidad los hechos siguientes:

El día 5-12-15, Heraclio, de 36 años de edad, hermano gemelo del acusado, se encontraba junto con su esposa María Virtudes y sus hijos Casiano y Justa de 12 y 7 años, respectivamente, en el domicilio sito en la C/ DIRECCION002 nº NUM001 de Cehegin, propiedad de los padres de aquel.

Sobre las 21'30 horas llegó al citado domicilio el acusado, Miguel, quien al ver allí a su hermano, le pidió que le devolviera una máquina lijadora afirmando que era suya. Heraclio se negó a ello contestando que no se la daría hasta que un amigo de Miguel, llamado "Rafael", le restituyera a su vez una máquina cortadora de azulejos.

Seguidamente los hermanos iniciaron una disputa verbal gritándose mutuamente. María Virtudes entonces cogió a la niña y se encaminó hacia su casa, colindante con la de sus suegros. El acusado Miguel y su hermano Heraclio pasaron de la disputa verbal a acometerse y forcejear mutuamente. En el curso de ese forcejeo el acusado Miguel le propinó a su hermano Heraclio un golpe en la ceja con una escoba que le causó una herida contusa lineal de 12 milímetros en la zona supraciliar izquierda externa y Heraclio agarró un paraguero que se encontraba en el recibidor de la casa y lo levantó frente al acusado, regresado a la casa su esposa María Virtudes, al escuchar los gritos de su hijo, arrebatándole el paraguero a su esposo, lo dejó en el suelo y salieron a la calle.

Ya en la calle cuando Heraclio se encontraba con la cabeza inclinada hacia abajo limpiándose la sangre de la herida de la ceja, el acusado Miguel que había salido tras él, sacó una navaja plateada, tipo mariposa, la abrió y, sin mediar palabra, actuando voluntariamente con intención de acabar con la vida de su hermano Heraclio, sin que éste pudiera aperebirse de ello, ni poder defenderse, le propinó un navajazo.

La referida agresión provocó a Heraclio una herida inciso punzante en la región toracoabdominal, que le afectó al peto esternocostal, cúpula diafragmática derecha, cavidad pleural derecha e hígado, con un trayecto único de delante hacia atrás y de 6 centímetros de profundidad, que afectó a los órganos vitales del pulmón derecho e hígado, provocando la muerte a los pocos minutos, sin que las asistencias médicas desplazadas al lugar pudieran remediarlo.

Que el acusado Miguel está diagnosticado de Trastorno mental y del comportamiento secundario al consumo de diversos tóxicos, que no alteró sus facultades intelectivas en relación con los hechos narrados, pero le provocó una disminución de las facultades volitivas.

El acusado Miguel era consciente del parentesco que le unía con Heraclio, como hermano gemelo uterino, que era.

II.- En cuanto a los hechos afectantes a la responsabilidad civil, y a la vista de la prueba practicada procede declarar declara probado lo siguiente:

El difunto Heraclio estaba casado con doña María Virtudes y fruto de dicha unión tenían dos hijos menores en común Casiano y Justa de 12 y 7 años, en el momento de los hechos.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene el siguiente fallo:

Que, conforme al veredicto del Jurado, debo condenar y condeno al acusado Miguel como autor responsable criminalmente de un delito de asesinato, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de trastorno mental en cuanto a la falta de control de los impulsos, a la pena de diecinueve años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta y al pago de las costas causadas, con inclusión de las de la acusación particular.

Y a que indemnice a María Virtudes en la cantidad de 126.538 euros y a cada uno de los dos hijos menores Casiano y Justa en la cantidad de 52.724 euros a cada uno, dichas cantidades devengará desde la fecha de la presente resolución y hasta su completo pago, el interés fijado en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Decreto el comiso y la destrucción de las piezas de convicción remitidas.

Firme que sea la presente resolución, practíquese liquidación de condena con abono del tiempo de detención y prisión provisional sufrida por Miguel. En concreto desde el día 7 de diciembre del 2015.

Únase a esta resolución el Acta del Jurado

Reclámese del Juez Instructor la conclusión en forma de la pieza de responsabilidad civil.

Practíquense las anotaciones oportunas en los libros registro y, firme la sentencia, en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndole saber que contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.

TERCERO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso en tiempo y forma, por la representación procesal de Miguel, recurso de apelación para ante este Tribunal Superior de Justicia, por los siguientes motivos:

1.- Quebrantamiento de normas y garantías procesales y de las previsiones del artículo

45 LOTJ, ex artículo 846 bis c a) LECR, interesando la devolución de la causa para celebración de un nuevo juicio.

2.- Error en la motivación del veredicto, ex artículo 846 bis c. a) LECR, interesando la devolución de la causa para celebración de un nuevo juicio.

3.- Error en la calificación jurídica del delito y su consecuencia jurídica, ex artículo 846 bis c. b) LECR, con infracción del artículo 139.1 del Código Penal, suplicando se dictase sentencia revocando la anterior.

4.- Vulneración de los principios de presunción de inocencia e *in dubio pro reo*, ex artículo 846 bis b. e) LECR, suplicando se dictase sentencia revocando la anterior.

CUARTO.- Por medio de la oportuna resolución se tuvo por interpuesto recurso de apelación contra la citada sentencia, dándose traslado del mismo a las restantes partes personadas para que en el plazo de cinco días pudiesen impugnar el mismo o formular recurso supeditado de apelación. Dentro del plazo conferido, el Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la confirmación de la sentencia apelada, y la representación procesal de María Virtudes e hijos, presentó igualmente escrito por el que interesaba se tuviera por desestimado el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la sentencia recurrida, con imposición de costas al apelante.

QUINTO.- Emplazadas las partes ante esta Sala Civil y Penal y recibidas las actuaciones para sustanciación del recurso interpuesto, se formó el correspondiente rollo de apelación, habiéndose personado en el mismo, en tiempo y forma, el apelante Miguel y los apelados Ministerio Fiscal y María Virtudes e hijos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 846 bis e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se señaló día y hora para el acto de la vista del recurso, que tuvo lugar, previa citación en forma de las partes, en el día y hora señalado, compareciendo todas ellas y quedando documentado el acto mediante la correspondiente grabación en soporte electrónico destinado al efecto, con el resultado que consta.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sala don Julián Pérez Templado Jordán, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El primer motivo del recurso se basa en el quebrantamiento de normas y garantías procesales (artículo 846 bis c, a, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 45 LOTJ). Se denuncia la desestimación

por el magistrado-presidente de la prueba testifical de doña María Virtudes, esposa del acusado, propuesta por la defensa al principio del juicio oral, a fin de que ilustrara al jurado de lo acontecido en la fiesta de la que venía el acusado y, en concreto, si había consumido alcohol o drogas tóxicas. Se trataba -dice- de concretar el estado del autor a los efectos de la eximente o atenuante de los artículos 20, 2º y 21, 1º del Código Penal.

Es doctrina jurisprudencial inconcusa que el derecho a la prueba no es absoluto e incondicional, sino que viene sujeto a demostrar que la omisión de la prueba originó que no se pudiera acreditar un hecho favorable al reo. Tal cosa no se ha dado en el presente caso, de forma que no se ha producido indefensión por la omisión de esta prueba. Por varios motivos, apuntados por el Ministerio Fiscal.

En primer lugar, porque el jurado tuvo a su disposición prueba suficiente para concluir, por vía de la atenuante apreciada, cuál era el grado de afectación de las facultades sicofísicas del acusado como consecuencia de la previa ingesta de sustancias sobre las que se pretendió que depusiese la testigo rechazada. Tales fuentes de prueba fueron, por un lado, los resultados objetivos del informe clínico del Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste donde fue examinado el acusado tras su detención; en él se constata la crisis de ansiedad que aquél presentaba, pero sin alusión alguna a afectación de facultades por consumo reciente de alcohol o sustancias estupefacientes. Por otro lado, la testifical de personas presentes en el lugar de los hechos (don Rafael y los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional actuantes), cuya intermediación con el acusado en el momento de cometer los hechos no tenía la testigo rechazada; en quien, además, concurría una relación de parentesco con el acusado (era su esposa) que condicionaría en cualquier caso su credibilidad, lo que no acontecía respecto de los otros testigos que sí fueron examinados ante los jurados.

En segundo lugar, porque la defensa, en el acto del juicio, ante la negativa del magistrado presidente a la admisión de la testifical, no hizo constar las preguntas que pretendía hacerle ni señaló en que forma su testimonio podía incidir en la apreciación del estado sicofísico del acusado al tiempo de comisión de los hechos por los que ha sido condenado. Ello impide, también ahora, discernir en qué medida aquel testimonio podría haber sido relevante para la decisión del jurado.

Por todos estos motivos, aunque bien es cierto que poco hubiera costado la práctica de prueba, la ausencia de ésta no tiene vigor suficiente para enervar el juicio y ordenar su repetición, máxime cuando el tribunal jurado, a la vista de la prueba practicada sobre tal extremo, ya apreció la disminución de las facultades volitivas del acusado determinante de la atenuante simple por trastorno mental recogida en la sentencia. Recordemos que el derecho a la prueba no es ni absoluto ni incondicional.

Procede la desestimación del motivo.

SEGUNDO.- El segundo motivo de impugnación de la sentencia se articula por la infracción del artículo 846 bis c, a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la motivación del veredicto. Reprocha el recurrente al jurado la falta de motivación de su decisión de optar por una de las dos proposiciones que el magistrado presidente formuló como alternativas en el hecho tercero del objeto del veredicto (los párrafos subrayados en la proposición A son los que faltan en la B), a saber:

ya en la calle, cuando Heraclio se encontraba con la cabeza hacia abajo limpiándose la sangre de la herida de la ceja el acusado Miguel que había salido tras él, sacó una navaja plateada tipo mariposa, la abrió y sin mediar palabra, actuando voluntariamente con intención de acabar con la vida de su hermano Heraclio, sin que éste pudiera apercibirse de ello, ni poder defenderse, le propinó un navajazo.

ya en la calle cuando Heraclio se encontraba limpiándose la sangre de la herida de la ceja, el acusado Miguel que había salido tras él, sacó una navaja plateada tipo mariposa, la abrió y sin mediar palabra, actuando voluntariamente con intención de acabar con la vida de su hermano le propinó un navajazo.

El jurado, por unanimidad apostó por la opción A. En esta cuestión basa la defensa apelante su impugnación, al manifestar que el jurado no motivó en ningún caso que el agredido tuviere la cabeza para abajo. Pero omite que la principal diferencia entre las dos proposiciones está en la penúltima frase incluida en la A ("sin que éste pudiera apercibirse de ello ni poder defenderse"). La defensa, aunque no lo manifieste con claridad, está impugnando la opción A estimada por el jurado frente a la B. Y el motivo de esta preferencia solo puede ser que mientras la primera opción (A) describe un asesinato proditorio, la otra opción (B) narra un simple homicidio. Otra cosa no se entiende del empeño en la falta de prueba de que la víctima tenía la cabeza para abajo. Esta circunstancia, sin perjuicio del respeto que nos merece la labor de la defensa, no es concluyente para nada. Ello es así porque el agraviado pudo tener la cabeza para arriba, para abajo, para uno de los lados o de frente, y no darse cuenta en el ambiente de violencia de que su hermano iba dispuesto a apuñalarle. Más motivo nos abona el hecho de que aquél se hallaba en un notable estado obnubilatorio de embriaguez. Lo cierto es que, cualquiera que fuese la posición de la cabeza, el jurado apreció que el acto fue proditorio, es decir, a traición y sin posibilidad de defensa. Eso fue lo que concluyó el jurado (no solo lo relativo a la posición de la

cabeza), decidiéndose en pleno uso de sus poderes por la opción A. Por último, es sabido que al jurado solo se le puede exigir, pues por definición es profano en derecho, una exposición pormenorizada del porqué de la prueba, bastando con una motivación "sucinta" según el dictado legal (artículo 61, 1 LOTJ). También debe tenerse en cuenta lo manifestado por la acusación particular en el escrito impugnatorio (último párrafo de la alegación 2ª) pues la nulidad del juicio debería conducir a una estéril repetición con el mismo resultado.

Por todo ello, procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- Entramos en la motivación 3ª del recurso de apelación, que se articula como infracción del artículo 846 bis c, a LECR , por error en la calificación jurídica del delito y su consecuencia jurídica. Reprocha el recurrente la calificación de los hechos conforme al artículo 139.1º del Código Penal (asesinato) y no por artículo 138 del mismo texto legal (homicidio).

Todo cuanto hemos dicho en el fundamento anterior es aplicable a esta nueva motivación que no deja de ser una variante sobre el mismo tema, esto es, si el acusado apuñaló a su hermano cuando éste se encontraba "con la cabeza hacia abajo limpiándose la sangre de la herida de la ceja" y " sin que éste pudiera apercibirse de ello, ni poder defenderse". En lo fundamental, lo que el jurado decide y el magistrado-presidente plasma en la sentencia es un asesinato proditorio o alevoso, sin que haya divergencia entre los unos y el otro. Dejémonos de juegos de palabras, tan asesinato es el proditorio, el alevoso o el cometido con alevosía proditoria, a traición, a mansalva -frase muy mal empleada en la actualidad-, sobre seguro, sorpresivo, etc..., pues nuestro idioma es viejo y rico. Y a los efectos que aquí interesan, es de todo punto irrelevante la modalidad de alevosía empleada. Desde tales presupuestos y resultado probatorio, resulta obvia la corrección de la calificación jurídica incorporada a la sentencia como delito de asesinato del artículo 139.1º, frente al de homicidio del artículo 138 patrocinado por el recurrente.

Procede la desestimación del motivo.

CUARTO.- El motivo 4º se articula al amparo del artículo 846 bis e LECR denunciando la vulneración de los principios de presunción de inocencia e *in dubio pro reo* . Alega el recurrente que, atendida la prueba practicada en el plenario, carece de base razonable la pena impuesta (sic), existiendo a su juicio serias dudas e incongruencias que, por un lado, impiden apreciar como probado que la acometida fuera como relata el Ministerio Fiscal y la acusación particular, y, por otro, que la alteración de las facultades sicofísicas del acusado no tuviera una intensidad mayor que la declarada en sentencia.

Para dar debida respuesta a este motivo es imprescindible recordar previamente el alcance de la revisión que corresponde hacer a la Sala de apelación en esta clase de procedimiento. La literalidad legal del motivo previsto en el artículo 846 bis c) e) remite al criterio de la razonabilidad de la condena impuesta, excluyendo la posibilidad de una plena revisión de la valoración probatoria efectuada por el Jurado. No se trata, por tanto, de alterar las conclusiones fácticas alcanzadas por éste, por otras que merezcan mayor fundamento para el recurrente o para el Tribunal ad quem, sino -tan solo- de excluir por la vía del recurso aquella valoración que resulte de todo punto irrazonable o infundada. Más concretamente, el Tribunal de apelación ha de analizar: a) el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto (contradicción, inmediación, publicidad e igualdad); b) el "juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; y c) el "juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Por lo que se refiere, en primer lugar, al reproche sobre las conclusiones alcanzadas por los jurados en cuanto a la forma de producirse el ataque, denuncia el recurrente la debilidad, imprecisión y falta de rigor de los testimonios tenidos en cuenta por los jurados: el de la esposa y el hijo menor del fallecido. Bien es cierto que cuanto se está bajo una fuerte tensión emocional los recuerdos, al narrar lo sucedido, pueden ser confusos y hasta contradictorios, mas esto no es lo que ha ocurrido en el caso de autos, por cuanto las declaraciones de la esposa del difunto, sumariales y en el juicio, son coincidentes en lo sustancial. El hecho de que estuviera presente en la primera sesión no puede significar una influencia decisoria en un cambio sustancial en su declaración que, como ya se ha dicho, no sucedió. También conviene recordar lo expuesto por ambas partes apeladas, de una parte la testigo estaba personada como acusación particular y en esa posición pudo estar informada de lo ocurrido. Pero hay más, ya que el juicio tuvo una amplia resonancia en los medios de comunicación y cualquier interesado podría informarse de su evolución. Y lo mismo cabe decir del testimonio del hijo menor. En cualquier caso, no se trata de sustituir la valoración que los jurados hicieron de la credibilidad y fiabilidad de dichos testimonios, así como del resto de pruebas que también fueron valoradas

y el recurrente omite, sino de constatar simplemente que, en lo que aquí interesa y de acuerdo a la doctrina antes expuesta: 1.- existió prueba de cargo legítima, bastante y de claro signo incriminatorio respecto de la concreta forma de producirse el ataque; 2.- que, a partir de dichas fuentes de prueba, los jurados alcanzaron su convicción sobre la realidad de una serie de hechos objetivos que aparecen perfectamente explicitados en la declaración de hechos probados que no pueden ser revisados por el Tribunal superior; y 3.- esta Sala constata, finalmente, la perfecta razonabilidad del juicio de inferencia vertido por el magistrado presidente en los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en justificación razonada y razonable de la convicción que alcanzaron los jurados sobre la culpabilidad del acusado.

Otro tanto sucede en lo referido al grado de afectación de las facultades sicofísicas del acusado. Hemos de significar, como bien explica el Ministerio Fiscal, que al jurado se le ofrecieron tres opciones: dos eximentes y una atenuante, y el jurado, por unanimidad escogió la última, concluyendo que "el consumo de drogas no alteró sus facultades intelectivas en relación con los hechos narrados, pero provocó una disminución de las facultades volitivas". También en este caso el control por la Sala de la razonabilidad de la convicción alcanzada por los jurados conduce a concluir que tal conclusión está fundada en una actividad probatoria desarrollada en el acto del plenario que ha sido valorada de forma razonable con la libertad de criterio que corresponde a los jurados y que no puede ser revisada en esta alzada.

Procede, por tanto, la desestimación íntegra de este cuarto y último motivo.

QUINTO.- En consecuencia, debe desestimarse íntegramente el recurso deducido la representación procesal del acusado, Miguel , contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2017, nº 298/2017, dictada en el rollo de Tribunal del Jurado nº 1/2017, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia , por la que se le condenaba al mismo a la pena de diecinueve años de prisión por delito de asesinato, confirmando en toda su plenitud dicha sentencia impugnada.

SEXTO.- Se declaran de oficio las costas de la presente alzada.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado Miguel , contra la sentencia dictada por el Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 28 de junio de 2017 , la que se confirma íntegramente, todo ello con declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente rollo de esta Sala, a todas las partes, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal en el plazo de cinco días a partir de la última notificación de la misma, y, una vez firme, devuélvanse los autos originales al Ilmo. Sr. Magistrado-presidente del Tribunal del Jurado que dictó la sentencia apelada, con testimonio de la presente resolución, y, en su caso, de la que pudiera dictarse por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y el correspondiente oficio para ejecución y cumplimiento de lo definitivamente resuelto.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Apelación, lo pronunciamos, lo mandamos y firmamos los Magistrados titulares de la Sala.